

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA LABORAL

Medellín, Septiembre 23 de 2020

Radicado: 05001- 31- 05-**003-2016-00786-01**
Demandantes: LUZ ALBA GALLEGO MÚNERA Y KAREN ACEVEDO GALLEGO
Demandados: COLPENSIDNES Y ARL POSITIVA SA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA
Tema: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES

La Sala Sexta de decisión, presidida por el magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN, e integrada por las magistradas MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA Y ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, procede a emitir sentencia dentro del proceso ordinario laboral promovido por LUZ ALBA GALLEGO MÚNERA Y KAREN ACEVEDO GALLEGO en contra de la ARL POSITIVA Y COLPENSIONES

Decisión que se emite en forma escrita atendiendo a las disposiciones del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020.

Acreditados los presupuestos procesales y sin que se evidencien causales de nulidad que invaliden lo actuado, se procede a emitir la presente decisión.

En atención al poder otorgado por el representante legal de Positiva compañía de seguros SA, a la sociedad Jurídica Abogados y Consultores SA se reconoce personería adjetiva al abogado Emerson Isaac Mercado Villalba, para que represente los intereses de esta accionada.

ANTECEDENTES

El *A quo*, tras considerar que el corte de árboles, actividad es una actividad similares o compatibles a aquellas para las que fue contratado Humberto Acevedo Mona por Beatriz

Elena Vélez, concluyó que el evento que llevó a la muerte del afiliado fue de origen laboral, condenando a la ARL Positiva al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en un 100% en favor de Karen Acevedo Gallego, pagando el retroactivo desde el 25 de marzo de 2015, más los intereses de mora de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, causados desde el 13 de julio de 2015. Denegó todas las pretensiones elevadas por Luz Alba Gallego y absolvió a Colpensiones de las súplicas.

Inconforme con la decisión fue apelada así:

La apoderada de Luz Alba Gallego indicó que a través del proceso adelantado ante la jurisdicción de familia se demostró que existió una unión marital de hecho por espacio superior a 20 años, además se acreditó que la pareja procreó una hija, quien al momento de la muerte superaba los 12 años de edad y por tanto se satisface el requisito de convivencia que da lugar al reconocimiento pensional.

La ARL Positiva disiente de la condena impuesta y de la justificación que expuso el A quo, quien consideró que el accidente fue de origen laboral, bajo el único argumento de no demostrarse que las labores que estaba realizando no fueran en provecho de la empleadora Beatriz Vélez.

Resaltó que el fallecido fue afiliado por Beatriz Elena Vélez, para prestar servicios dependientes para ésta en el municipio de San Jerónimo en una finca de nombre “Pie de Cuesta”; sin embargo, se demostró que el accidente que generó la muerte ocurrió en el Municipio de Sopetrán, aunado a que la empleadora Beatriz Vélez al reportar el presunto accidente de trabajo, informó que su trabajador para el día del fatídico evento estaba por fuera del sitio de trabajo, realizando actividades externas a aquellas para las que fue contratado, sin que obrara con el consentimiento de ésta.

Añadió que la demandante relató que el accidente ocurrió en un sitio diferente a la finca donde laboraba, que estaba haciendo trabajos de corte de árboles, los que eran autorizados por su empleadora y que había sido contratado por una persona que no era dueño de la finca. Es decir, se trataba de labores esporádicas ajenas a su trabajo, que no

eran en favor de la empleadora, por ello no fue un accidente de trabajo que debiera ser cubierto por esta entidad.

Subsidiariamente y en el evento que se confirme el reconocimiento pensional, solicita se revise la condena por intereses de mora, en tanto no existió una reclamación a la ARL, ya que aquella que se tomó como referencia por el A quo, fue elevada a Colpensiones y solo con la notificación de la demanda se tuvo conocimiento de la reclamación.

ALEGATOS

Concedido el término de traslado de que trata el artículo 15 del Decreto 806 de 2020 Colpensiones sostiene que no hay lugar a condena a su cargo, en tanto el suceso que causó la muerte del señor Acevedo Mona correspondió a un evento de origen laboral. Añade que la accionante no demostró la convivencia por el tiempo necesario para reputarse beneficiaria de la eventual prestación.

A su vez la accionada positiva compañía de seguros reitera los argumentos expuestos en el recurso de apelación, tras indicar que no hay lugar a condena a cargo de esta accionada, ya que el evento que llevó a la muerte del afiliado no puede calificarse como de origen laboral.

CONSIDERACIONES

Es relevante expresar que en el presente caso se encuentra por fuera de discusión que: **1)** Fabio Humberto Acevedo Mona falleció el 25 de marzo de 2015 en el municipio de Sopetrán – Antioquia, así lo informa el registro civil de defunción obrante a folio 15, **2)** Que al momento del fallecimiento, el señor Acevedo Mona se encontraba afiliado y realizando cotizaciones a la ARL Positiva SA (así se acepta en respuesta al hecho 3° de la demanda fl. 130) y al sistema general de pensiones a través de Colpensiones, entidad en la que acumuló 374.57 semanas, de las cuales 100.14 corresponden a los 3 años anteriores a su deceso (fl. 193) **3)** Que el 25 de marzo de 2015 la señora Gallego Múnera en nombre propio y en representación de su hija menor Karen Acevedo Gallego reclamó a

Colpensiones el reconocimiento pensional, el que fuera negado aduciendo que el suceso que causó la muerte del afiliado fue de origen profesional, aunado a que la reclamante no acreditó la calidad de compañera permanente por espacio de 5 años anteriores al momento de la muerte del afiliado (fl. 23/26) y **4)** Que a la ARL Positiva, basada en los hallazgos de su investigación, concluyó que el accidente sufrido por el afiliado Acevedo Mona fue de origen común (fls. 27/36).

En este orden de ideas, atendiendo los aspectos objeto de apelación y estando por fuera de discusión la causación de la prestación, en tanto se hallan satisfechos los requisitos establecidos en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 (50 semanas cotizadas dentro de los 3 años anteriores al fallecimiento), y el artículo 11 de la Ley 776 de 2002, (que no establece requisito distinto a la efectiva afiliación) le corresponde a esta Corporación determinar: **i)** Origen del accidente que causó la muerte del afiliado Fabio Humberto Acevedo Mona; **ii)** Procedencia de la pensión de sobrevivientes en favor de Luz Alba Gallego Múnera por demostración de la calidad de compañera permanente y **iii)** Procedencia de los intereses de mora.

Pues bien, respecto al **origen de la muerte del afiliado Fabio Humberto Acevedo**, debe tenerse presente que el sistema general de seguridad social ampara a los ciudadanos ante la ocurrencia de contingencias tales como la vejez, invalidez y muerte. Respecto a las últimas contingencias – invalidez y muerte- se estableció la asunción de la responsabilidad por diferentes entes, ello conforme se determine que se trató de un evento de origen común o profesional. Así, en el primer caso las cargas serán de cuenta de un Fondo de Pensiones del sector público o privado, o en el segundo evento, por cuenta de una administradora de riesgos profesionales.

A efectos de determinar si un evento corresponde a uno de origen profesional, se acude al artículo 3 de la Ley 1562 de 2012, que define el accidente de trabajo como:

“...todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.

Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.

También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función.

De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión”

Bajo esta misma premisa la Sala de Casación Laboral de la C.S.J de forma pacífica y reiterada ha indicado que, la responsabilidad que asume el empleador y que se traslada a las administradoras de riesgos profesionales con ocasión de la afiliación al sistema de riesgos profesionales, comporta una responsabilidad objetiva, que se configura cuando se genera un daño al trabajador con causa de las actividades contratadas – causa directa –, o con ocasión de este, – causa indirecta- y que no se rompe por un hecho del trabajador, de un tercero o por fuerza mayor o caso fortuito. Al respecto, esta Corporación en sentencia CSJ SL417-2018, indicó:

“Por consiguiente, un infortunio tiene el carácter de profesional cuando deriva, ya sea inmediata o mediatamente del trabajo o es resultado del cumplimiento de las funciones propias del cargo, o del desarrollo de actividades que, si bien no implican estricto cumplimiento de aquellas, guardan estrecha relación con el servicio para el cual fue contratado, a tal punto que son inherentes y conexas a las labores designadas, de modo que si el trabajador sufre un accidente ejecutándolas, debe considerarse que este es de orden profesional. ...” :

Lo expuesto muestra que la clasificación de un evento como de origen profesional no solo abarca aquellas que describen la actividad contratada, sino todos los comportamientos inherentes a su realización, como lo son el desplazamiento dentro del lugar de trabajo, actividades de capacitación y todas aquellas impuestas en ejercicio de la subordinación a la que se encuentra sometida el trabajador; al respecto la sentencia CSJ radicado 36922, 16 mar. 2010, que indicó:

“Se trata de actividades o comportamientos que no pueden deslindarse de la ejecución del trabajo, porque, en unos casos, necesariamente deben darse para que se pueda prestar el servicio, como el traslado del trabajador desde y hacia la empresa o el ingreso a ella, y, en otros eventos, corresponden a la atención de necesidades personales o físicas del trabajador. Así ellas se adelanten fuera de la empresa, son constitutivas de un accidente de trabajo, pues no rompen el nexo de causalidad con el trabajo”

En cuanto a las situaciones o conductas ajenas a la labor, no conexas a éstas y que no se ejecutan en pro de la misma, la Sala de Casación Laboral indicó que las mismas exceden la responsabilidad patronal y por tanto no se hallan amparadas por el sistema de riesgos laborales, en tanto se rompe el nexo de causalidad entre la labor desempeñada u orden impartida por parte del empleador, y el hecho generador de la muerte del trabajador., al respecto indicó la Corporación en sentencia SL 17443 de 2017, que indicó:

“Esta Corporación ha precisado que la existencia de un accidente de trabajo se acredita con el vínculo causal entre el hecho fortuito y el trabajo desempeñado, que bien puede ser de manera directa o indirecta, sin que sea suficiente que el acontecimiento funesto ocurra en el entorno laboral, porque el suceso puede presentarse sin que en el momento de la ocurrencia se esté ejecutando acatamiento a una orden del empleador y en este evento el accidente se califica como de origen común”.

De cara a las anteriores premisas legales y jurisprudenciales concluye la sala que las inferencias realizadas por el A quo son erradas, así:

A folio 15 obra el registro civil de defunción que indica que el señor Acevedo Moná falleció en Sopetrán – Antioquia.

Sobre los hechos ocurridos, se cuenta con una misiva dirigida por la empleadora Beatriz Elena Vélez a la ARL Positiva, donde informa que el causante laboraba como mayordomo en su finca de recreo en la Vereda Pie de Cuesta del Municipio de San Jerónimo, pero que al momento del siniestro se encontraba por fuera del sitio de trabajo, pues se hallaba en Sopetrán en la vereda Rio Abajo, sin estar la empleadora al tanto de tal ausencia. Refirió que el señor Acevedo Moná acostumbraba a podar árboles en la zona como actividad

externa a la finca, de lo que estaba al tanto la empleadora, pero que no se informó de la salida el día 25 de marzo de 2015 (fl. 120).

Sitio de la muerte y actividad ejecutada que son confirmadas por la demandante Luz Alba Gallego, quien en su declaración de parte refirió que Fabio Humberto trabajaba como mayordomo en la Finca Pie de Cuesta en San Jerónimo, pero que fue contactado por una persona conocida como el “costeño” para cortar unos árboles en una finca en Sopetrán, por tanto, no correspondía al mismo lugar de trabajo.

Sobre este aspecto, las testigos María Emilse Delgado y Ana María Zapata, quienes adujeron no conocer mucho sobre los hechos que rodearon la muerte de Fabio Humberto, si aclararon que éste era mayordomo en una finca en San Jerónimo, pero que falleció en Sopetrán por aplastamiento de un árbol.

Son estas las pruebas aportadas al proceso, las que valoradas de forma conjunta, conforme a la sana crítica llevan a concluir que la actividad que causó la muerte de Fabio Humberto Acevedo no tenía ninguna relación con aquella para la que fue contratado por Beatriz Elena Vélez, ni afiliado a la ARL Positiva SA, pues además que no se ejecutaron en la misma finca de recreo en la que era mayordomo, no se probó de forma suficiente que fuera en provecho de la empleadora o se hubiera desplazado allí por orden de aquella, reiterando que la simple permisión o aquiescencia no genera un nexo de causalidad entre la actividad realizada y aquella amparada.

Se destaca que el raciocinio del A quo parte de una premisa incorrecta, cual es presumir el nexo causal, asignando a la ARL la carga de desvirtuarla, cuando en realidad era a la parte actora a quien le correspondía demostrarlo.

En adición se denota un juicio subjetivo y caprichoso, pues concluye que por tratarse de una actividad similar a la que debía realizar como mayordomo, esta era de origen profesional y a cargo de la ARL accionada, perdiendo de vista que se está en presencia de un accidente de trabajo cuando se ejecutan las labores contratadas o aquellas necesarias, accesorias a su cumplimiento, o desarrolladas en razón al poder subordinante del

empleador, lo que no ocurrió en el presente evento, pues no se demostró que cortar árboles en otro finca y otro municipio diferente al sitio de trabajo, sin el conocimiento de la empleadora y que no le beneficiaban, redundara en la labor contratada.

De igual forma el A quo generó presunciones incorrectas, en tanto que asumió que la actividad era en provecho de la empleadora, pues no se probó lo contrario, obviando la prueba recaudada que indicaba que se trataba de una actividad ajena a aquella para la cual fue vinculado laboralmente por Beatriz Elena Vélez y lo afilió al sistema de seguridad social, desplazando a la ARL el cubrimiento de todas las contingencias ocurridas por una actividad similar a la de mayordomo, conclusión que rompe con la sana crítica y que no se halla sustentada probatoriamente, lo que llevará a la revocatoria de la decisión del fallador de primer grado.

Ahora bien, la demandante dentro de su declaración aludió a que Fabio Humberto fue contactado para realizar un trabajo de corte de árboles, actividad que realizaba con su propia herramienta – motosierra y lazos-, sin embargo, ninguno elementos de juicio se aporta al respecto, es decir, solo se identifica a la persona que lo contactó por un sobrenombre “el costeño”, no se sabe si se trató de una actividad remunerada o gratuita, se desconoce quién fue o sería el beneficiado con la tala del árbol, ni quien era el propietario de la finca, por lo que no puede concluirse que se tratara de un accidente de origen profesional, pues no se hallan demostrados los contornos de existencia de una relación laboral en los términos del artículo 22 del C.S.T, es decir no se tiene certeza cual fue la labor encomendada – prestación personal del servicio - por quien fue contactado – empleador-, se desconoce si se pactó algún precio – remuneración – y si se hallaba bajo la subordinación de alguien – continuada dependencia o por el contrario lo realizaba bajo su propio riesgo, en tanto utilizaba su propia herramienta.

Así las cosas, sin que se demuestre que la actividad que causó la muerte de Fabio Humberto Acevedo fue producto del cumplimiento de una actividad laboral, conexas a ésta o en cumplimiento de órdenes de algún empleador, forzoso es concluir que tal fatídico evento es de origen común, y por ende las prestaciones que de ella se deriven se encuentran a cargo del sistema general de pensiones, en este caso de Colpensiones, entidad a la que se

hallaba afiliado el causante, quien como ya se indicó, satisfizo los requisitos de consolidación de la pensión de sobrevivientes en favor de sus beneficiarios, por lo que será revocada la sentencia del A quo.

En cuanto a la **calidad de beneficiaria de la señora Luz Alba Gallego Múnera** relató la recurrente que la demostración de la convivencia efectiva como compañeros permanentes se logra con la sentencia que declaró la unión marital de hecho, la que fue aportada al proceso como prueba sobreviviente.

Al respecto parte esta corporación de la premisa que la pensión de sobrevivientes tiene como propósito brindar un marco de protección al grupo familiar del afiliado o del pensionado que fallece, compensando económicamente todos aquellos daños que su muerte causa. Se busca pues que los beneficiarios mantengan un grado de seguridad social y económica del que gozaban mientras vivía el pensionado o el afiliado (C-1176 de 2001).

En relación a la pensión para los cónyuges y compañeros permanentes, se debe tener presente que la condición fundante de la calidad de beneficiario es la efectiva convivencia, la decisión de formar un hogar, las actuaciones que den cuenta de la intención de seguir un rumbo común, la constante y permanente ayuda y socorro mutua, la solidaridad, y acompañamiento, por lo que se excluyen los encuentros ocasionales, fortuitos o esporádicos.

En igual forma se ha indicado que para los eventos de compañeros permanentes, tal calidad ha de mantenerse hasta el momento del fallecimiento del afiliado o pensionado, pues al tratarse de una situación fáctica, al romperse la convivencia, con los elementos ya expuestos, la condición de compañeros permanentes también desaparece e impide el reconocimiento de los derechos pensionales. (SL 1399 de 2018)

Ahora bien, relativo a la temporalidad de dicha convivencia, acoge esta Corporación el criterio vertido en sentencia SL 1730 de junio 3 de 2020 donde la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia rectifica la interpretación que se venía dando al artículo 12

de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, para indicar que el plazo de 5 años de convivencia sólo es exigible cuando se pretenda la pensión de sobrevivientes con ocasión de la muerte de un pensionado, tanto para cónyuge o como compañero (a) permanente.

En la mencionada providencia, aclaró la máxima corporación que desde la incorporación de tal requisito se pretendió desestimar las uniones fraudulentas, proteger a los verdaderos beneficiarios de reclamaciones artificiosas y contener conductas dirigidas a la obtención injustificada de beneficios económicos del sistema, es por ello que se presenta mayor exigencia para acceder a una sustitución pensional (por muerte de pensionado), requisito que no se hace exigible respecto de los afiliados cotizantes, quienes previo a su muerte no tenían ninguna situación consolidada.

Respecto a la calidad de compañeros permanentes, su acreditación no se encuentra sujeta a tarifa legal, ya que para su demostración la parte puede valerse de todos los medios probatorios, los que deberán presentarse en la debida oportunidad y permitir su contradicción frente a la parte contraria, con los cuales el juez de cara a la sana crítica y facultad de libre formación del conocimiento elaborará las conclusiones que resuelvan de fondo las cuestiones planteadas.

En esta misma línea argumentativa, si no existe tarifa legal, tampoco ha de considerarse que exista una prueba que categóricamente lleve a su demostración, como son procrear hijos o la declaración de existencia de unión marital de hecho.

Frente a esta última ha indicado la Sala de Casación Laboral de la C.S.J que la declaratoria de una unión marital de hecho no reemplaza la acreditación judicial de la convivencia que exige la ley de seguridad social, en tanto aquella da cuenta de la existencia de la conformación de una sociedad patrimonial, figura ajena al derecho de la seguridad social y que no lleva inescindiblemente a considerar que el solicitante cumple con las condiciones para adjudicarle el derecho pensional.

Bajo esta premisa se observaron las pruebas aportadas al proceso así:

En la sentencia emanada del Juzgado Promiscuo de Familia de Santa Fe de Antioquia, del 8 de septiembre de 2016 se declaró la existencia de una unión marital de hecho entre Luz Alba Gallego Múnera y Fabio Humberto Acevedo Mona, ocurrida entre el 15 de enero de 1985 y el 25 de marzo de 2015, mismo lapso en que existió entre aquellos una sociedad patrimonial de compañeros permanentes (fls. 92/95)

Para llegar a tal conclusión, relata la providencia que fueron escuchados los testimonios de Adriana del Socorro Zapata Osorio, Sandra Milena Hernández Gallego y Margot Isabelia Zapata Gallego frente a quienes elevó la siguiente consideración:

“son enfáticos al señalar que los señores LUZ ALBA GALLEGO MÚNERA Y FABIO HUMBERTO ACEVEDO MONA, fueron compañeros permanentes por más de 18 años, hasta que el señor FABIO HUMBERTO ACEVEDO MONA perdió la vida en un accidente, vivieron en el Municipio de San Jerónimo (Ant.), de dicha unión nació KAREN ACEVEDO GALLEGO. El trato social y familiar de la pareja era como marido y mujer, los dos se ayudaban mutuamente. (fl. 93).

Sobre el mismo aspecto concluyó:

“los señores LUZ ALBA GALLEGO MÚNERA Y FABIO HUMBERTO ACEVEDO MONA, convivieron bajo el mismo techo como pareja marital de hecho, desde mediados del mes de enero de 1985, hasta el 25 de marzo de 2015, fecha en la cual el señor FABIO HUMBERTO ACEVEDO MONA perdió la vida en un accidente. Durante esta unión procrearon una hija (hoy menor de edad), y el domicilio común fue el municipio de San Jerónimo (Ant.)” (fl. 93 vuelto)

En cuanto a la prueba testimonial, en diligencia del 24 de julio de 2017 fueron escuchadas las señoras María Emilse Delgado Bedoya y Ana María Zapata, quienes expresaron conocer a la accionante y a Fabio Humberto por muchos años, por ser vecinos en San Jerónimo.

María Emilse Delgado relató que se desempeña como estilista y en razón de ello tiene contacto con la accionante, además porque son primas lejanas. Indicó que Luz Alba es madre de dos hijos, Daniel y Karen, que desconoce quién es el padre de Daniel y que Karen es hija de Fabio Humberto, siendo éste el compañero permanente de Luz Alba por

más de 20 años y que desde el año 2006 le consta directamente que éstos convivían bajo el mismo techo.

Relató que la pareja conformada por Fabio Humberto y Luz Alba habitaba las fincas donde eran mayordomos, allí los visitaba esporádicamente esta testigo para brindar los servicios de peluquería, además que ellos la contactaban en su casa para los mismos fines, por eso sabe que ellos tenían una relación de compañeros permanentes, que no existían otras parejas sentimentales, que no se llegaron a separar hasta el día del fallecimiento de Jaime Humberto.

A su vez **Ana María Zapata Guerra** quien indicó que ha vivido en épocas en San Jerónimo - Antioquia y que se halla radicada en este municipio de forma permanente en los 10 años anteriores a su declaración; señaló que conoció de la convivencia de Jaime Humberto y Luz Alba, que esta fue por espacio de 20 años, pues vivían juntos en fincas donde eran mayordomos. Explicó que Luz Alba es madre de tres hijos: Sandra Milena, Daniel y Karen, quienes son de padres diferentes, pero sólo tiene conocimiento que Luz Alba sostuvo una relación permanente con Jaime Humberto, padre de la menor Karen.

Adicional a folios 36 y 37 obran las declaraciones extrajudicio de María del Socorro Pérez Zuluaga, Adriana del Socorro Zapata Osorio y Luz Dari Gutiérrez, quienes afirmaron conocer la pareja conformada por Fabio Humberto Acevedo y Luz Alba Gallego, que aquellos convivieron en unión marital de hecho por espacio de 20 años hasta el día de su fallecimiento y que de esa unión se procreó una hija, Karen Acevedo Gallego.

Son estas las pruebas aportadas al proceso, las que son valoradas en conjunto y de cara a las reglas de la sana crítica y permite a la corporación concluir que entre los señores Jaime Humberto Acevedo Moná y Luz Alba Gallego existió una verdadera relación entre compañeros permanentes, que no se trató de una unión fugaz u ocasional, sino que pervivió gracias a la intención conjunta de formar un hogar y tener un rumbo común.

Para llegar a tal conclusión la sala se vale de los dichos de Ana María Zapata y María Emilse Delgado, quienes conocieron a la pareja por varios años, sabían que realizaban de forma conjunta la actividad de mayordomos en diferentes fincas de recreo, que procrearon una hija que tenía unos 12 ó 13 años de edad al momento del fallecimiento del señor Acevedo Moná y que esta relación no se vio truncada por separaciones o la presencia de otros compañeros sentimentales.

Disímil a lo expresado por el A quo, para la sala las declaraciones no resulta confusas, por el contrario sus dichos denotan espontaneidad, relatan lo que recuerdan, presentan un panorama de varios años en los que siempre identifican a los señores Jaime y Luz Alba juntos, desarrollando un proyecto económico juntos como mayordomos, sin que sea necesario que presenten detalles de la vida en pareja, como los nombres de las anteriores parejas sentimentales de Luz Alba y padre de sus hijos Daniel y Milena, en tanto estos aspectos hacen parte de la intimidad familiar.

Tampoco resulta acertado descartar los dichos de los testigos por razones de no visitar el hogar de la pareja frecuentemente, en tanto tal raciocinio pierde de vista que Jaime Humberto y Luz Alba habitaban una finca de recreo que no les pertenecía, procurando su sostenimiento, cuidado y vigilancia, siendo prudente que éstos no recibieran visitas.

En adición, debe tenerse presente que la prueba testimonial no se orienta a obtener un detalle pormenorizado de las actividades de la familia, día a día, sino que a través de este se busca obtener algunos rasgos de la conducta de pareja; en este sentido con los dichos de las testigos se muestra que Jaime Humberto y Luz Alba se proyectaban ante la sociedad como compañeros permanentes, en una relación duradera.

Hipótesis esta que se nutre de las demás pruebas aportadas al proceso como son las declaraciones extra-juicio y el fallo que declaró la existencia de una unión marital de hecho donde se indica que la pareja estuvo unida por 20 años hasta el momento del fallecimiento de Jaime Humberto, sin que se presentaran separaciones y que procrearon una hija,

nacida el 22 de agosto de 2003, sin que sea menester exigir un determinado tiempo de convivencia, ni tener un extremo inicial definido, pues como se indicó, el requisito de cinco (5) años de convivencia solo se exige cuando se reclama la prestación con ocasión de la muerte de un pensionado (SL 1730 de 2020).

Así las cosas, será revocada la sentencia del A quo para en su lugar declarar el derecho que le asiste a Luz Alba Gallego Múnera al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su compañero permanente. Prestación que habrá de compartir con su hija Karen Acevedo Gallego, de quien no se discute su calidad de beneficiaria en los términos del literal c del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en tanto aun es menor de edad, además que la filiación con el afiliado fallecido se acredita con el certificado de registro civil de nacimiento (fl. 16)

Prestación que estará a cargo de Colpensiones, que se reconoce en cuantía de 1 SMLMV, toda vez que los SBC no son superiores a tal monto (fl. 193) y que se concede a razón de 13 mesadas anuales. Calculado el retroactivo pensional entre el 25 de marzo de 2015 y el 31 de agosto de 2020 asciende a **CINCUENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS (\$53´043.897)**, divididos en partes iguales para ambas accionantes, mesadas de las que se autoriza a Colpensiones a realizar los descuentos con destino al sistema de seguridad social en salud.

Año	Valor mesada	N° mesadas	Sub total mesada Karen Acevedo	Sub total mesada Luz Alba Gallego	SUB TOTAL
2015	\$ 644.350	10,16	\$ 3.273.298	\$ 3.273.298	\$ 6.546.596
2016	\$ 689.454	13	\$ 4.481.451	\$ 4.481.451	\$ 8.962.902
2017	\$ 737.717	13	\$ 4.795.161	\$ 4.795.161	\$ 9.590.321
2018	\$ 781.242	13	\$ 5.078.073	\$ 5.078.073	\$ 10.156.146
2019	\$ 828.116	13	\$ 5.382.754	\$ 5.382.754	\$ 10.765.508
2020	\$ 877.803	8	\$ 3.511.212	\$ 3.511.212	\$ 7.022.424
TOTAL			\$ 26.521.948	\$ 26.521.948	\$53.043.897

Mesadas que no se encuentran afectadas por la prescripción extintiva, ya que desde la fecha de su causación – 25 de marzo de 2015 - y la reclamación a Colpensiones el 13 de mayo del mismo año (fl. 23) y entre la fecha que se notificó la respuesta de esta

reclamación – 6 de octubre de 2015 (fl. 22) y la presentación de la acción judicial el 26 de junio de 2016 (fl. 12) no transcurrió un término superior a 3 años.

A partir del 1° de septiembre de 2020 Colpensiones seguirá reconociendo la mesada en cuantía de 1 SMLMV, a razón de 13 mesadas anuales, pagado una proporción del 50% a cada una de las accionantes. Precizando que el derecho en favor de Karen Acevedo Gallego habrá de extinguirse una vez esta arribe a los 18 años, salvo que acredite la calidad de estudiante ante la entidad accionada, situación que permitirá la pervivencia del derecho por el tiempo de sus estudios y que no podrá extenderse más allá del cumplimiento de los 25 años de edad.

Respecto a los intereses de mora, también se revocará la condena que se impuso a la ARL Positiva compañía de seguros, toda vez que no es esta la entidad encargada de la satisfacción del derecho pensional.

Respecto a Colpensiones, no se gravará con esta condena, toda vez que la negación en el reconocimiento pensional se justificó por las controversias que respecto al origen del fallecimiento del afiliado surgieron y la demostración de la condición de compañera permanente de Luz Alba Gallego que hicieron necesario agotar el proceso judicial para dilucidarlos. (al respecto la sentencia SL 2587 de 2019).

En subsidio y para compensar los efectos nocivos de la pérdida del poder adquisitivo, se ordenará la indexación de las condenas, aplicando a cada mesada la variación del IPC vigente al momento del pago.

Por último, referente a las costas procesales, se revocará aquellas impuestas a la ARL Positiva y se cargará a Colpensiones con las costas de ambas instancias. En esta se tasan las agencias en derecho en 1 SMLMV.

En mérito de lo expuesto, la **SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **REVOCA DE FORMA TOTAL** la sentencia en su lugar declara:

PRIMERO: El accidente que generó la muerte del afiliado Fabio Humberto Acevedo Moná fue de origen común, afiliado que dejó causada la pensión de sobrevivientes en favor de sus beneficiarias por satisfacer la densidad de cotización de que trata el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003.

SEGUNDO: Condena a Colpensiones a reconocer la pensión de sobrevivientes en favor de Luz Alba Gallego Múnera y Karen Acevedo Gallego, prestación en cuantía de 1 SMLMV, a razón de 13 mesadas anuales.

TERCERO: Calculado el retroactivo pensional generado entre el 25 de marzo de 2015 y el 31 de agosto de 2020 asciende a **CINCUENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS (\$53´043.897)**, divididos en partes iguales para ambas accionantes, mesadas de las que se autoriza a Colpensiones a realizar los descuentos con destino al sistema de seguridad social en salud. Monto que se pagará con la debida indexación.

CUARTO: A partir del 1° de septiembre de 2020 Colpensiones seguirá reconociendo la mesada en cuantía de 1 SMLMV, a razón de 13 mesadas anuales, pagado una proporción del 50% a cada una de las accionantes. Precizando que el derecho en favor de Karen Acevedo Gallego habrá de extinguirse una vez esta arribe a los 18 años, salvo que acredite la calidad de estudiante ante la entidad accionada, situación que permitirá la pervivencia del derecho por el tiempo de sus estudios y que no podrá extenderse más allá del cumplimiento de los 25 años de edad.

QUINTO: Absuelve de todas las pretensiones a la ARL Positiva compañía de seguros, declara probada la excepción de inexistencia de intereses de mora e impróspera la excepción de prescripción.

Cosas en ambas instancias a cargo de Colpensiones, en esta se tasan las agencias en derecho en 1 SMLMV, divididas en partes iguales para ambas accionantes.

Lo resuelto se notifica a las partes en ESTADOS. Se ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen.

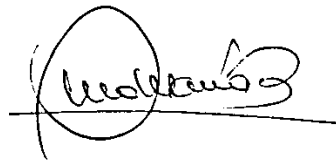
Los Magistrados,



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ

CERTIFICO: Que el auto anterior fue notificado por ESTADOS No. 139 fijados hoy en la secretaría de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín a las 8 a.m. Medellín, septiembre **24 de 2020**